



MEMORIA ABREVIADA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LOS AGENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Esta memoria abreviada de análisis de impacto normativo, se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y se estructura con los contenidos indicados en la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN) aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2015 (BORM, núm. 42, de 20 de febrero).

1. Justificación de la MAIN abreviada.

La Guía Metodológica para la elaboración de la MAIN, en su apartado A 'Introducción', señala que esta *'[...] se configura como un instrumento de reflexión para que las personas responsables de su redacción y por tanto encargadas de la elaboración de un proyecto normativo, se planteen la conveniencia, legalidad y la repercusión que dicho proyecto puede producir en la sociedad, teniendo en cuenta que la extensión de la MAIN, la profundidad y amplitud del análisis y estudio que conlleva necesariamente la elaboración de la MAIN debe ser correlativo a la entidad y contenido de cada proyecto normativo, por lo que la Guía deberá ser aplicada teniendo en cuenta esta necesaria flexibilidad'*, reconociendo, además, en el número 6º del precitado apartado que, *'En aquellos casos en los que se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en alguno o algunos de los ámbitos, de tal forma que no corresponda la elaboración de una MAIN completa, se elaborará una MAIN abreviada [...]'*.

En relación con lo expuesto, la Ley 12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 35, señala que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá financiar, mediante subvenciones con cargo a los créditos destinados a cooperación internacional para el desarrollo, los programas, proyectos y acciones de las entidades públicas y privadas que cumplan con los requisitos establecidos en la propia Ley y en las correspondientes bases generales, que se correspondan con las previsiones del Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de sus planes anuales. Son precisamente esas bases generales de concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva para proyectos de cooperación al desarrollo, las que ahora se pretenden aprobar con esta Orden. Por tanto, la extensión de la MAIN debe ser acorde con esta finalidad y al acotado contenido de la Orden que es el propio de unas bases reguladoras de subvenciones. Además, la aprobación de la Orden no genera un impacto presupuestario apreciable





hasta que no se realice la convocatoria de las subvenciones, lo que posibilita la redacción de una MAIN abreviada.

2. Oportunidad y motivación técnica.

2.1.- Elementos que demuestran la pertinencia y conveniencia de la norma propuesta.

La ley 12/2007, de 27 de diciembre de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece el régimen jurídico de la cooperación internacional para el desarrollo que realice la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con objeto de erradicar, en los países en vías de desarrollo, la pobreza en todas sus manifestaciones y las causas que lo producen y contribuir así a promover un desarrollo humano integral en esos países.

La consecución del citado objetivo ha de conseguirse de forma participativa y coordinada con diferentes actores, en especial, con los agentes de la cooperación en la Región de Murcia a los que hace referencia el artículo 40 de la citada ley.

Entre los instrumentos a través de los que se lleva a cabo la política regional de cooperación, el artículo 12.1 de la ley, menciona la cooperación económica, consistente en aportaciones destinadas a proyectos de inversión para el aumento del capital de los pueblos en desarrollo y a proyectos de cooperación para el desarrollo destinados a mejorar sectores básicos para el desarrollo tales como el agroalimentario, educativo, sanitario, infraestructuras, transporte, comercio, medio ambiente y otros.

Así, esta orden de bases tiene por objeto financiar los proyectos que se dirijan a la mejora de las necesidades básicas y las condiciones de vida de la población destinataria de las actuaciones, en el marco de los objetivos y prioridades establecidos en la Ley 12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Agenda 2030 y de los instrumentos de planificación de la política regional de cooperación internacional para el desarrollo.

Lo que se pretende pues, es auxiliar los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que presenten los agentes de cooperación del artículo 40 de la Ley 12/2007, de 27 de diciembre.

2.2.- Necesidad y oportunidad de la aprobación.

Hasta ahora las bases reguladoras de estas subvenciones se establecían en la Orden de 6 de noviembre de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento (BORM nº 259, de 9 de noviembre de 2017). Como consecuencia de la experiencia acumulada en la aplicación de la citada orden, era necesario aprobar una nueva orden con la finalidad de aumentar la objetividad y equidad en la asignación de estos recursos públicos mediante el establecimiento de unos nuevos criterios de valoración de





solicitudes con desglose puntos. En el mismo sentido, se hace patente la exigencia de simplificar los procedimientos de concesión de estas subvenciones, aclarar sus trámites y dar respuesta a las demandas de los agentes de cooperación internacional para el desarrollo para hacer más ágil la gestión de estas ayudas.

Las razones de oportunidad de continuar destinando recursos económicos en forma de subvenciones a las ONGD que ejecuten proyectos de cooperación internacional son, si cabe, más relevantes en el contexto actual. Ciertamente, tal como recoge el último Plan anual de Cooperación Internacional, de 25 de junio de 2020, la crisis sanitaria y humanitaria como consecuencia de la pandemia por COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) está implicando, sin duda, un impacto mayor en los países más vulnerables y especialmente, en los países en vías de desarrollo, causando no solo un elevado número de víctimas por disponer de unos sistemas sanitarios muy débiles sino también generando un impacto negativo en su desarrollo social y económico, difícil de afrontar sin contar con ayuda exterior.

Al mismo tiempo el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 en la Región de Murcia aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de diciembre de 2020, señala entre las políticas palanca o políticas “aceleradoras” (accelerating policies) por ser motores del desarrollo sostenible, la cooperación para el desarrollo. A la vista de lo expuesto por el Plan, se asume el compromiso de promover en los próximos años, un fortalecimiento de la cooperación murciana, desde el punto de vista normativo, institucional y presupuestario, que le permita desempeñar el papel que le corresponde como política palanca en el proceso de transformación ineludible que exige la implementación de la Agenda 2030 en la Región de Murcia.

2.3.- Objetivos de la norma y novedades que se pretenden introducir.

Como hemos dicho, con estas nuevas bases reguladoras, se pretende actualizar y mejorar las bases aprobadas por la Orden de 6 de noviembre de 2017 que hasta ahora regulaban este tipo de subvenciones.

Las principales novedades que aquí destacamos son:

- Se ha trasladado a la convocatoria, el apartado correspondiente a los requisitos de los proyectos subvencionables, al no ser un contenido mínimo exigible de las bases reguladoras (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
- Se han diferenciado claramente los requisitos exigidos a las entidades para poder ser beneficiarias de estas subvenciones de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para su concesión.
- *Cuantía, condiciones para la determinación de la subvención, forma de pago y garantías.* Se ha añadido la posibilidad de que cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya





aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.

- *Procedimiento de concesión.* Se incorpora que, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, cuando el crédito consignado sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes, una vez finalizado cada plazo de presentación establecido en la convocatoria y se establece la posibilidad de proceder al prorrateo, entre los/las beneficiarios/as de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- *Solicitud.* Se simplifica respecto a las bases anteriores señalando que la solicitud se realizará exclusivamente en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (<https://sede.carm.es>) y remitiendo a la convocatoria la documentación e información que deberá acompañarse. Se fija el plazo de presentación en veinte días, salvo que se fije uno distinto en la convocatoria.
- *Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.* Se recogen algunos trámites del procedimiento que no aparecían especificados en las bases anteriores.
- *Criterios de valoración y su ponderación.* Aquí se han introducido algunas modificaciones buscando la mejora de la objetividad y la transparencia. Así se han desglosado todos los criterios de valoración permitiendo a las entidades solicitantes conocer previamente a la presentación de sus solicitudes, la puntuación de cada uno y su ponderación respecto al total del proyecto.

Destacamos aquí:

- Se ha aumentado la puntuación del proyecto o actividad respecto a la entidad solicitante, adquiriendo así mayor porcentaje respecto a la puntuación total.
- Han sido eliminados algunos criterios subjetivos como la gestión eficaz o eficiente de otras acciones y otros repetitivos o poco claros en su formulación.
- Por último, destaca la introducción de nuevos criterios de valoración como: la vinculación del proyecto a las metas de la Agenda 2030; la incorporación de nuevos enfoques transversales como el enfoque de derechos humanos (EBDH), la infancia, la promoción del comercio justo y el consumo responsable, el buen gobierno, el fortalecimiento institucional, democrático y de la sociedad civil; la aportación un plan de difusión y comunicación del proyecto. También se puntúa ahora, si tanto la entidad como el socio local aportan una estrategia de igualdad de género definida y coherente o si la formulación del proyecto detalla los factores de riesgo con indicación del grado de probabilidad y se plantean alternativas.

En todo caso, las bases reguladoras recogen los elementos y requisitos mínimos de la concesión de las subvenciones a proyectos de cooperación





internacional, conforme a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Por lo que respecta a su contenido, la Orden debe respetar el mínimo establecido en el artículo 17.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a lo que se añade lo que establezca la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. Motivación y análisis jurídico.

3.1.- Competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la materia cuya regulación se pretende.

Las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de cooperación internacional para el desarrollo se fundamentan en el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, conforme a la cual “corresponde también a la Región la ejecución, dentro de su territorio, de los tratados internacionales y de los actos normativos de las organizaciones internacionales en lo que afecte a materia de su competencia”. En ejercicio de esta competencia, se dictó la Ley 12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.2.- Base jurídica y rango del proyecto normativo.

Conforme con el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos por la ley. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, las citadas bases se aprobarán por Orden del Consejero de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido (artículo 13.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

De acuerdo con artículo 13.2 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el contenido mínimo de las bases reguladoras será el establecido en el artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones.

Por su parte, el artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones, establece que la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención.

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del art. 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del art. 12 de esta ley.

d) Procedimiento de concesión de la subvención.





e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.

f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.

h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

Además del citado artículo 17.1, la Ley General de Subvenciones, el Reglamento General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre contemplan de forma dispersa en su articulado determinadas previsiones que deben contener las bases reguladoras.

En atención a lo anterior:

- Se ha establecido la posibilidad de que la convocatoria pueda fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento General de Subvenciones.

- Sobre la base del artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del artículo 36.1 de la Ley 12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se establece el pago anticipado de las subvenciones.

- Se exonera a los/las beneficiarios/as del establecimiento de garantías, de conformidad con en el artículo 16.2 d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 36.2 de





la Ley 12/2007, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Se establece la previsión de no fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, cuando el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes, una vez finalizado cada plazo de presentación establecido en la convocatoria (artículo 55.2 del Reglamento General de Subvenciones).

- Asimismo, se establece la posibilidad de proceder al prorrateo, entre los/las beneficiarios/as de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones, como establece el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- También se dispone que cuando la cuantía de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la que figura en la solicitud presentada, se solicitará a los/las beneficiarios/as la reformulación de su solicitud, para ajustar los compromisos y las condiciones a la propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.

3.3.-Tramitación de la Orden.

Respecto de la tramitación, ésta viene descrita, como se ha dicho, en el artículo 13 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, según el cual, las bases se aprobarán por aprobarán por Decreto del Presidente o por Orden, en el resto de los casos, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y previo informe del servicio jurídico-administrativo de la Consejería competente, y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. De acuerdo con el artículo 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, la iniciación del procedimiento se llevará a cabo, a través de la oportuna propuesta dirigida al consejero, por el órgano directivo de su departamento competente por razón de la materia, mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, al que se acompañarán la exposición de motivos y una memoria de análisis de impacto normativo que incluirá en un único documento el contenido establecido en el apartado tercero del artículo 46.

Como ya se indicó en la MAIN de 3 de marzo, de conformidad con el artículo 53.3 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, relativo al procedimiento de elaboración de los reglamentos, se ha prescindido de los trámites de consulta pública, audiencia e información públicas por tratarse de una norma que no afecta a *los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos* y porque los destinatarios de las subvenciones que se regulan, los agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en la Región de Murcia han participado en el procedimiento de elaboración de la Orden a través del otorgamiento de un trámite de audiencia y la emisión de informe como miembros en el Consejo Regional de Cooperación Internacional (artículo 6 h) del Decreto 66/1994, de 1 de julio).





3.3.1. Alegaciones presentadas.

Para la elaboración del texto de la Orden se remitió el proyecto junto con la MAIN de 3 de marzo de 2021, a los miembros del Consejo Regional de Cooperación Internacional y en la reunión de 10 de marzo, se les invitó a que presentaran alegaciones y aportaciones, otorgándole un plazo de 10 días.

Así, con fecha 10 de marzo, UNICEF Comité Murcia solicita que se contemple en la Orden de bases la especificidad para justificar los fondos recibidos que tiene UNICEF como organismo dependiente de Naciones Unidas.

Por su parte, la Coordinadora de ONGD de la Región realiza las siguientes aportaciones:

1ª) Artículo 3. Cuantía, condiciones para la determinación de la subvención, forma de pago y garantías.

En el apartado 1 de este artículo se establece que “La cuantía de la subvención no podrá superar el 80 por ciento del presupuesto del proyecto o actividad para la que se solicita la subvención y con el límite máximo que se establezca en la orden de convocatoria”.

Proponemos que la frase subrayada se sustituya por: “[...] pudiendo establecerse límite máximo en la orden de convocatoria”. De este modo no se da por hecho que deberá limitarse el presupuesto para cada entidad, algo que podrá dejar de hacerse cuando los créditos destinados a AOD se recuperen.

2ª) Sobre los diferentes plazos Proponemos que se explicita que los plazos señalados en todos los documentos se refieren a días HÁBILES.

3ª) Sobre la pertenencia a redes.

Proponemos que se puntúe la pertenencia a redes de entidades del ámbito de la Cooperación Internacional en general y no a la Coordinadora de ONGD en particular.

Pese a que en este momento no existen otras agrupaciones de entidades dedicadas a cooperación para el desarrollo en la Región de Murcia creemos que es preferible no limitar la puntuación a la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.

Por tanto, proponemos que en los baremos aparezca algo como: “Pertenece a alguna red de entidades en el ámbito de la cooperación para el desarrollo en la Región de Murcia”, pudiendo aparecer la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia como ejemplo de estas redes

4ª) Sobre la obligación de hacer publicidad de organismos financiadores en terreno Dadas las dificultades que puede conllevar la realización de publicidad de las entidades financiadoras sobre el terreno solicitamos que, dentro de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se pueda publicitar la





fuentes de financiación a nivel regional o sobre el terreno, de manera alternativa a criterio de la entidad en función de las condiciones sobre el terreno. Si no es posible realizar publicidad de la entidad financiadora sobre el terreno, la ONGD podrá justificarlo con una memoria escrita, material audiovisual u otros elementos que dejen constancia de las dificultades encontradas.

5ª) Justificación económica mediante auditoría La justificación mediante auditoría no puede ser obligatoria en ningún caso. Pese a que valoramos positivamente que los costes de auditoría puedan imputarse a la subvención, consideramos que ésta debe ser voluntaria. Además, este requisito puede imposibilitar a determinadas entidades concurrir a las convocatorias.

3.3.4. Respuesta a las alegaciones.

Respecto a la alegación de UNICEF Comité Murcia se acepta y se introduce la siguiente apartado 3º en el artículo dedicado al *plazo y forma de justificación*:

3. En el caso de que el/la beneficiario/a de la subvención sea un Organismo internacional del sistema de Naciones Unidas o entidades que ejerzan su representación, se estará a dispuesto en la normativa que sea de aplicación.

La contestación de las alegaciones presentadas por la Coordinadora de la ONGD se abordará siguiendo el orden de su formulación:

1ª) En relación con la propuesta de sustituir el inciso final del artículo 3.1 “y con el límite máximo que se establezca en la orden de convocatoria” (...) por “pudiendo establecerse el límite máximo en la orden convocatoria”, el artículo 17.3, letra f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, *la cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación*.

Por tanto, las bases reguladoras, entre las dos alternativas posibles, ha optado por que sea la orden de convocatoria de estas subvenciones la que determine la cuantía individualizada de la subvención teniendo en cuenta para su fijación la cuantía total máxima establecida en aquella dentro de los créditos disponibles.

2ª) En cuanto a que los plazos señalados en todos los documentos se refieran a días hábiles, esto es así por aplicación del artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común que dispone que siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo de los sábados, los domingos y declarados festivos; no obstante, no existe inconveniente en señalarlo expresamente.

3ª) La propuesta de que se puntúe la pertenencia a redes de entidades del ámbito de la Cooperación Internacional en general y no a la Coordinadora de ONGD en particular, merece una valoración positiva. De este modo, se cambia la redacción de la letra c) del criterio A.1.4 “grado de implantación en la Región de Murcia” en el





sentido de valorar “pertenecer a alguna red de entidades en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, incluida la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia”.

4ª) Sobre la obligación de hacer publicidad de organismos financiadores en terreno, la Coordinadora esgrime las dificultades de su realización en el terreno y propone que se puede optar de forma alternativa a criterio de la entidad.

Entre las obligaciones de los beneficiarios el artículo 14 en relación con el 18.4 de Ley General de Subvenciones indican la de dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de la subvención, en los términos reglamentariamente establecidos. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones señala que las bases reguladoras deberán establecer las medidas de difusión que debe adoptar el beneficiario. A este respecto, estas bases establecen como medida de difusión específica (artículo 10) la incorporación de forma visible de la imagen corporativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en toda la documentación que se derive del proyecto y en los medios utilizados para su publicidad. Por consiguiente, en tanto que la entidad beneficiaria acredite esa incorporación, habrá cumplido con la obligación de dar la adecuada publicidad a la financiación autonómica del proyecto objeto de subvención exigida por la ley.

5ª) Por último, la Coordinadora pide que para justificar la subvención no sea nunca obligatorio la presentación del informe de un auditor. A este respecto, se mantiene la previsión establecida en las bases, de que la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, para las subvenciones por importe superior a 15.000,00 €, revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor.

Se ha optado por incluir de manera obligatoria en esta convocatoria a partir de dicha cantidad, esta modalidad de justificación con informe de auditor, por las siguientes razones:

- Se han tomado como modelos otras líneas de subvención de la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de concurrencia competitiva a las que concurren las mismas entidades solicitantes. Como ejemplo, se puede citar la convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general con fines sociales a desarrollar por entidades del tercer sector, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se ha optado, por tanto, por homogenizar el régimen de justificación en todas las convocatorias existentes dirigidas a las mismas entidades. Es además, la modalidad de justificación que se está generalizando en la mayoría de las Administraciones en este ámbito de gestión pública (comisión europea, AECID...).





- Se ha planteado esta propuesta por las grandes dificultades que se han detectado para la correcta presentación de la justificación por parte de las entidades beneficiarias, lo que se traduce en que se alarguen los procedimientos de justificación y en una mayor carga administrativa (Ej. reiterados requerimientos de la documentación). La intervención de un auditor garantiza que antes de la presentación ante la Administración, la entidad haya recopilado toda la documentación necesaria para justificación de la aplicación de los fondos y que se facilite la información de un modo satisfactorio.
- Asimismo, se facilita la labor de comprobación de las subvenciones a los técnicos de la Dirección General, lo que cobra importancia si se tiene en cuenta de que estamos ante documentación y gastos derivados de la ejecución de proyectos en el extranjero.
- Por último, no se entiende que suponga un mayor coste para la entidad, por cuanto se produce una reducción proporcional en los gastos de administración (gastos personales en el técnico que debe presentar la justificación) y además tiene la consideración de gastos subvencionables con el límite fijado en la normativa reguladora y convocatoria.

Como resultado de la aceptación de las alegaciones y de la introducción de otras mejoras se ha elaborado un nuevo proyecto de Orden de bases que junto con la presente MAIN se someterá a los miembros del Consejo Regional de Cooperación Internacional con el fin de que puedan emitir su informe de acuerdo con el artículo 6 h) del Decreto 66/1994, de 1 de julio.

Las referidas mejoras han consistido en:

- Como resultado de aceptar la alegación de la Coordinadora relativa a cómo valorar grado de implantación en la Región de Murcia se ha cambiado el tenor del primer apartado en los siguientes términos: “se coordina o colabora con las Administraciones, o con otras entidades y empresas del sector”.
- Valorar el enfoque de la infancia dentro del apartado “integración de los enfoques transversales” con la siguiente redacción: “el proyecto tiene en cuenta la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia”.
- Incluir entre las obligaciones del beneficiario/a de la subvención la de “declarar otras ayudas, recursos, o ingresos financiadores del proyecto o actividad, o, en su caso, la declaración negativa expresa de la inexistencia de otras fuentes de financiación de la actividad subvencionada, acogiendo, así, la recomendación del informe de 10 de marzo de 2021 de control financiero de la Intervención Delegada.
- Eliminar el párrafo 2º del artículo 16 de la cuenta justificativa simplificada porque no resulta de aplicación a estas subvenciones.





3.4.- Breve descripción del contenido.

La Orden se estructura en veinte artículos, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 establece el objeto y finalidad.

El artículo 2 designa a los beneficiarios.

El artículo 3 regula la cuantía, condiciones para la determinación de la subvención, forma de pago y garantías.

El artículo 4 contiene el procedimiento de concesión.

El artículo 5 se refiere a la solicitud.

El artículo 6 describe los órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.

El artículo 7 contiene los criterios de valoración y su ponderación.

El artículo 8 regula la resolución.

El artículo 9 se ocupa de la reformulación de las solicitudes.

El artículo 10 enumera las obligaciones de los beneficiarios.

El artículo 11 se refiere a los gastos subvencionables.

El artículo 12 ordena la modificación de la resolución.

El artículo 13 declara el régimen de compatibilidad de las subvenciones.

El artículo 14 describe el plazo y forma de justificación.

El artículo 15 trata la cuenta justificativa con informe de auditor.

El artículo 16 regula la cuenta justificativa simplificada.

El artículo 17 se refiere a la devolución voluntaria.

El artículo 18 regula la responsabilidad y régimen sancionador.

El artículo 19 se ocupa del reintegro.

El artículo 20 describe la publicidad de las subvenciones y obligación de suministro de información.

La disposición derogatoria única deroga las bases vigentes.

La disposición final única se refiere a la publicación y entrada en vigor.

3.5 - Listado de las normas cuya vigencia quede afectada por la norma que se pretende aprobar.





Se deroga la Orden de 6 de noviembre de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento (BORM nº 259, de 9 de noviembre de 2017), por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a conceder a los agentes de cooperación al desarrollo en la Región de Murcia para la realización de proyectos de cooperación internacional.

3.7 - Necesidad de alta o actualización del servicio o procedimiento previsto en la disposición que se pretende aprobar en la Guía de Procedimientos y Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia.

Cuando se realice la convocatoria de estas subvenciones, debido a las novedades que suponen estas bases, será necesario actualizar el procedimiento (código 2468) previsto en la Guía de Procedimientos y Servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4. Informe de impacto presupuestario.

La entrada en vigor de la Orden no tiene efectos sobre sectores, colectivos o agentes económicos distintos de las entidades beneficiarias ni afecta a la competencia, la unidad de mercado o la competitividad, sí se aprecian potenciales efectivos positivos en la cooperación al desarrollo pues asegura el reforzamiento del apoyo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en esta materia a los agentes de la cooperación internacional.

La aprobación en sí de las bases no supone incremento de gasto público en el presupuesto regional hasta que no se convoquen las subvenciones.

5. Informe de impacto por razón de género y de orientación sexual, identidad o expresión de género

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, tiene como objeto, hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres, mediante la regulación de aquellos aspectos orientados a la promoción y consecución de dicha igualdad. Entre sus principios generales, figuran la no discriminación de las mujeres en favor de los hombres; la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; la transversalidad y la eliminación de las discriminaciones tanto directas como indirectas.

Por otro lado, la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tiene por objeto regular los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar plenamente la igualdad real y efectiva de estos colectivos, mediante la prevención, corrección y eliminación de toda discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género, en los sectores públicos y privados.

El proyecto de Orden se ha redactado utilizando un lenguaje inclusivo, no incluye ninguna medida que implique diferencia entre mujeres y hombres, de tal modo





que no comporta discriminación ni directa ni indirecta de un sexo en favor del otro, ni altera el necesario equilibrio en la igualdad de oportunidades, no comportando tampoco discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género.

Las bases reguladoras, a través de los criterios de valoración, otorga prioridad a las actuaciones que incorporen los enfoques de género y diversidad, en los términos recogidos en el Plan Anual de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020 aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2020.

De este modo, respecto del enfoque de género, el Plan recuerda que *el artículo 3 de la 12/2007, de 27 de diciembre, recoge, entre los principios rectores de la cooperación murciana, la igualdad de género como principio esencial para el desarrollo humano sostenible. En coherencia con este carácter, se establece en su artículo 6 que, en todas las actuaciones de la política regional de cooperación internacional para el desarrollo, se tendrán en cuenta como elementos transversales, entre otros, el enfoque de género.*

En su desarrollo, el Plan Director determina como sector prioritario, la promoción de la mujer en los distintos aspectos: derechos, educación, formación en higiene y salud, participación comunitaria, cooperativo. Añade que por su parte, para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno de los 17 ODS y se recoge de manera específica en el ODS 5.

Sin duda, la promoción de la mujer supone el motor de transformación para el bienestar de las familias, el progreso comunitario y en definitiva, el mantenimiento de la paz social.

Por todo ello, desde la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación se considera preciso tener presente en todas las actuaciones llevadas a cabo durante el 2020, el enfoque de género e incluso, se plantearán actuaciones concretas dirigidas a la promoción de la mujer y a la lucha contra la discriminación por razón de género y a la violencia contra la mujer. A modo de ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, se propone recoger como sector prioritario de actuación en las distintas convocatorias de subvenciones, la promoción de la mujer, o incluso, se impulsarán acciones concretas con este fin (ej. organización de jornadas sobre mujer y desarrollo...), de suerte que se convierta en un signo distintivo de la cooperación murciana.

Por tanto, se concluye que con la publicación de estas bases reguladoras el impacto en igualdad y diversidad de género es significativo y positivo.

6. Impacto en la infancia y en la adolescencia.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE de 29 de julio), que modifica Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código





Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE de 17 de enero), establece en su artículo 22 el siguiente contenido: “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia

Estas bases reguladoras también, a través de los criterios de valoración, dan prioridad a las actuaciones que incorporen los enfoques de la infancia y adolescencia en los términos recogidos en el Plan Anual de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020.

Así, en cuanto al enfoque de infancia y adolescencia se señala que los derechos de la infancia están plenamente reconocidos en la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada como Tratado Internacional sobre Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989. Los niños y niñas tienen derechos específicos y necesidades particulares, que requieren una especial protección. Además, la pobreza afecta especialmente a la población infantil y juvenil en los países en vía de desarrollo. Por último, son sujetos fundamentales de desarrollo y agentes esenciales de cambio y transformación social que supone la Agenda 2030.

Por todo ello, son merecedores de un tratamiento especial dentro de la cooperación murciana, otorgando al enfoque de infancia y adolescencia un carácter transversal o estableciendo como prioritarias en las correspondientes convocatorias actuaciones dirigidas a la protección de sus derechos y promoción de su desarrollo o fomentando la participación infantil en temas de cooperación y Agenda 2030, por su papel de agentes de cambio.

Por tanto, se concluye que con la publicación de estas bases reguladoras el impacto en la infancia y en la adolescencia es significativo y positivo.

7. Informe de impacto normativo en la familia.

Según lo establecido en la disposición adicional décima de la *Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE de 29 de julio)*, que modifica la *Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas (BOE de 19 de noviembre)*, es necesario y obligatorio evaluar el impacto en la familia en todos los proyectos normativos. Esta obligación queda recogida así en dicha disposición: “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia”.

Las bases reguladoras al priorizar los colectivos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas mayores, favorece la protección de la familia.

8. Otros impactos.

En el Plan de Acción de implementación de la Agenda 2030 aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2020 se incluye como medida transformadora la incorporación de la perspectiva ODS en los procedimientos de





elaboración de disposiciones de carácter general. Dicha perspectiva se traduce en la necesidad de incorporar en la MAIN, el impacto de la norma proyectada en la consecución de la Agenda 2030, destacándose su vínculo con uno o más de los ODS, cuyo logro pretende.

En este sentido, entre las políticas palanca o políticas “aceleradoras” (accelerating policies) por ser motores del desarrollo sostenible, identificadas por el Plan de Acción en la Región de Murcia, se encuentra la cooperación para el desarrollo. De este modo, el Plan de Acción estatal señala que la Agenda 2030 es una agenda de desarrollo que nos concierne a todos, y que encuentra en la cooperación internacional para el desarrollo uno de sus principales instrumentos para la actuación coordinada en favor de los territorios menos adelantados y de las personas que más lo necesitan por encontrarse en situaciones de extrema pobreza, de guerra y afectadas por efectos climáticos adversos, entre otros condicionantes.

Por tanto, se concluye la necesidad de situar en el centro de la Agenda Pública, las políticas de Cooperación Internacional al Desarrollo. Y ello porque desde un punto de vista estratégico, la finalidad de la cooperación murciana constituye la expresión material de la Agenda 2030, o, dicho de otro modo, sus objetivos específicos se identifican de un modo equivalente con los ODS, esto es, promover el desarrollo humano.

A la vista de lo expuesto por el Plan, los principales ODS vinculados a la ayuda humanitaria son: Objetivo 1: Poner fin a la pobreza. Objetivo 2: Hambre y seguridad alimentaria. Objetivo 3: Salud y Bienestar. Objetivo 4: Educación de calidad. Objetivo 5: Igualdad de género. Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. y Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

El Técnico Superior

Ignacio Peñalver Manrubia

(documento firmado electrónicamente)

